



Valparaíso, 25 de septiembre de 2018

Sr. Carlos Montes Cisternas
Presidente del Senado de Chile

De nuestra consideración:

El día de hoy ingresó a trámite legislativo al Congreso Nacional, el Mensaje N° 119-366, con el cual el Presidente de la República dio inicio un Proyecto de Ley que Modifica el DFL N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DFL N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a Establecimientos Educacionales, fortaleciendo las facultades del director en materias de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.

El proyecto de artículo único establece lo siguiente:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Modifícase la letra d) del artículo 6° del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, del Ministerio de Educación, de la siguiente manera:

1. Incorpórase en el párrafo quinto, a continuación del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración “Con todo, estas exigencias no serán aplicables en caso de configurarse alguna de las causales descritas en el párrafo décimo segundo del presente literal”.

2. Incorpórase, a continuación del párrafo décimo primero, los siguientes párrafos décimo segundo y décimo tercero nuevos, pasando el actual párrafo décimo segundo a ser décimo cuarto, y así sucesivamente:

“Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en el presente literal, se procederá a la expulsión o cancelación de la matrícula, mediante el procedimiento descrito en el párrafo siguiente, a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:

a) Uso, posesión, tenencia y almacenaje, en el establecimiento educacional o sus inmediaciones, de aquellas armas previstas en las letras a), b), c) d), e) y h) del artículo 2° del decreto N° 400 del Ministerio de Defensa Nacional, que Fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la ley N° 17.798, Sobre Control De Armas, o de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o

infecciosos cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustibles u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas molotov y otros artefactos similares.

b) Agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

El director deberá notificar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula, junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.”.

3. Modifícase el párrafo décimo segundo, que ha pasado a ser décimo cuarto, de la siguiente manera:

a) Sustitúyese la frase “El director, una vez que haya aplicado” por “Siempre que el director aplique”.

b) Incorpórase a continuación de la expresión “cinco días hábiles” la siguiente frase “o una vez resuelta la reconsideración, según corresponda”.

c) Agrégase a continuación de la palabra “anteriores” la frase “así como el respeto a las garantías del debido proceso”.

Tal como lo señala el Mensaje del Proyecto de Ley, el contenido del mismo se refiere a:

“El primer párrafo que se agrega por medio del presente proyecto establece que mediante un procedimiento abreviado se sancionará con la expulsión o cancelación de matrícula a aquellos estudiantes que, dentro de un establecimiento educacional, incurran en alguna de las siguientes infracciones: uso, posesión, tenencia o almacenaje de armas; uso, posesión o almacenaje de elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativas; posesión, tenencia, porte, colocación, envío, activación, lanzamiento, detonación o disparo de bombas o artefactos explosivos; y agresiones físicas graves que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.

El segundo párrafo que se incorpora establece un procedimiento especial que los establecimientos llevarán a cabo en caso de incurrirse en alguna de las causales señaladas precedentemente. Este nuevo procedimiento posibilita la expulsión o cancelación de la matrícula en un plazo de 5 días, en contraposición con los 25 días promedio que demora este tipo de sanciones con la normativa actual. Asimismo, establece que la solicitud de reconsideración por parte de los padres o apoderados del estudiante infractor no suspende los efectos de la sanción, por lo que permitiría separar de inmediato al involucrado en este tipo de actos del resto de la comunidad educativa, sin perjuicio de lo que finalmente se decida luego de la reconsideración que eventualmente puedan presentar los apoderados.”

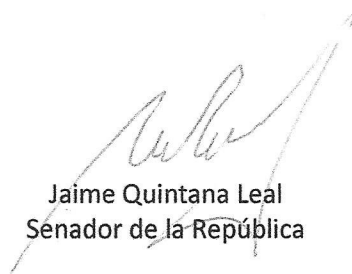
Así, vemos que el proyecto establece procedimientos especiales ante conductas que serán calificadas únicamente por los directores de los Establecimientos Educacionales, los que llevan a una gravosa sanción, la cual es perder el derecho a la Educación por parte del Estudiante.

Es por lo anterior, que solicitamos que el Honorable Senado de la República, mediante oficio emanado por la Corporación, pida la opinión respecto al Presente Proyecto antes descrito a la Corte Suprema, a fin de que informe en derecho sobre los preceptos que se quieren incluir en nuestra legislación mediante el mensaje Presidencial que fortalece las facultades del director en materias de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica, en especial a que se refiera al procedimiento establecido para expulsar a los alumnos que incurran en las causales expresadas en el Proyecto de Ley.

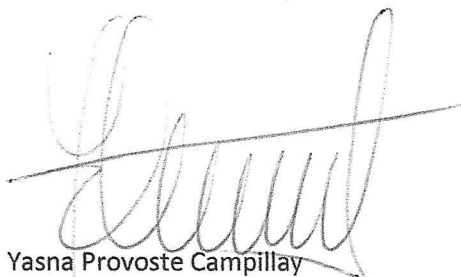
Sin otro particular.



Juan Ignacio Latorre Riveros
Senador de la República



Jaime Quintana Leal
Senador de la República



Yasna Provoste Campillay
Senadora de la República